



Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

EXPTE 16518/2022

**“CHS DE ARGENTINA c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”**

Sentencia Definitiva

En la Ciudad de Buenos Aires, reunidos los Sres. Magistrados integrantes de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social para emitir pronunciamiento en la presente causa se procede a emitir el voto:

EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:

Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de la Sala en virtud de la impugnación presentada por CHS DE ARGENTINA contra la resolución administrativa N°2085-E-2021 que determinó la existencia de deuda de \$ 2.267.762,34 por **diferencia de contribuciones** a la seguridad social en concepto de capital e intereses, así como también por imposición de multa por el **periodo fiscal 01/2010 (\$ 576), 02/2010 a 05/2013 (\$328.351,17) y 06/2013 a 12/2016 (\$508.435,54)** con base en la Resolución General 1566/2010.

La empresa apelante rechaza la pretensión administrativa argumentando que su parte nada adeuda atento haber cumplido con las contribuciones a su cargo encuadrándose en el artículo 2° inciso b) del **Decreto 814/2001**, por ser éste el inciso que le es aplicable.

Entre los argumentos vertidos la impugnante explica que se trata de una empresa con casi 90 años de trayectoria, cuyo origen se remonta a un conjunto de fusiones entre cooperativas de agricultores de EEUU, cuya actividad se centra en la compra, venta, distribución comercialización, importación, exportación y/o análisis de mercado de productos agrícolas especialmente granos vegetales y sus derivados. CHS DE ARGENTINA cumplió con los requerimientos fiscales de información y acreditó fehacientemente su actividad principal por lo que entiende que no puede ser incluida en el inciso a) del artículo 2do. del decreto 814/0, y por lo que se le reclama la aplicación de una alícuota del 21% sobre nómina salarial para el cálculo de las contribuciones patronales cuando lo correcto, a su entender es el 17%. Menciona que interpuso, frente a las actas administrativas, la correspondiente impugnación la que fue desestimada con fundamento en una incorrecta interpretación fáctica y normativa llegando a conclusiones arbitrarias.

El organismo, por su parte expresa que el recurso interpuesto no constituye una verdadera expresión de agravios, limitándose a considerar que hubo ilegitimidad y arbitrariedad en el accionar del Estado Nacional planteando la nulidad de las actas labradas. AFIP rechaza tales planteos pues entiende que se cumplió acabadamente con las exigencias previstas en el art. 7 de la ley 19.549.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

explica que el decreto 1009/01 reglamenta el decreto 814/01 remitiendo a la resolución 24/01 de la SEPyME solo para definir los sectores comprendidos y la forma de cálculo de las ventas totales anuales que deben considerarse. Explica el organismo que las leyes 24.476 y 25.300 son las que establecen el marco regulatorio y de fomento de las PyMES pero ninguna de ellas define el concepto de PyME limitándose a encomendar tal tarea a la autoridad de aplicación. Con ese fin la Resolución 24/01 clasifica las empresas según el tipo de actividad (comercio, servicios etc.), define el concepto de ventas totales anuales estableciendo los parámetros de cálculo de esas ventas y fija sus montos máximos. Así, al intentar obtener de esa normativa una definición unánime de PyME se observa que este es un concepto variable, sujeto a la finalidad que en cada caso persigue la norma que la contiene. De allí que el concepto de PyME a los efectos de la determinación de la alícuota de las contribuciones patronales es la que surge del Decreto 1009/01. En cuanto a la remisión efectuada por el decreto 1009/01 a la Resolución 24/01 la única finalidad que tiene es la de definir la actividad principal del empleador y la forma de cálculo de sus ventas pero el concepto de PyME a los efectos de la determinación de la alícuota a aplicar es el que surge de dicho decreto ya que ese aspecto no ha sido remitido. Concluye el organismo en su contestación de agravios rectificando el reclamo por el periodo 05/2011 a 12/2016, con un monto de capital de \$ 634.433,71, intereses por \$ 2.294.223,61 y multa por \$ 576 (periodo 01/10) y \$ 277.775,94 (periodo 02/10 a 05/13).

Ahora bien, la apelante no ha dado cumplimiento a la exigencia prevista en el artículo 15 de la ley 18.820 a fin de posibilitar la apertura de esta instancia, no obstante, acompaña un **seguro de caución** extendido por Premier Compañía Argentina de Seguros SA, póliza 15478 por la suma de \$2.596.689,51 entendiendo que garantiza suficientemente la deuda reclamada.

Procederé a la habilitación de la presente instancia dado el monto de lo reclamado, priorizando de este modo el debido derecho a la defensa en juicio (art. 18 CN). Lo anterior responde al criterio amplio propiciado en la materia por el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación a fin de evitar que el pago impuesto por el legislador importe un real menoscabo a garantías constitucionales (ver CSJN sent. del 14/05/95 “Sanatorio Otamendi y Miroli” DT 1996-A-319; ídem. sent. del 11/06/98 “Cadesu c/DGI” y “Pandolfi c/DGI” pub. LL 25/02/2010 N° 1143636 entre otros). Por otra parte, el Supremo Tribunal ha aceptado la presentación del seguro de cauciona como sucedáneo válido del depósito exigido por el artículo 15 de la ley 18.820 (conf. “Orígenes AFJP SA c/AFIP” Fallos 331:2480).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

En cuanto al fondo del tema sometido a juzgamiento entiendo que asiste razón al apelante.

Del juego armónico de las resoluciones y decretos aplicables surge que el decreto 1009/2001 ha variado sustancialmente el contenido de la Resolución 24/01 de la SEPyME y en consecuencia también los montos a partir de los cuales corresponde aplicar la alícuota numérica aplicable en concepto de contribuciones patronales.

En el caso que nos ocupa nos encontramos frente a una empresa dedicada a la comercialización, importación, exportación de productos agrícolas y sus derivados, no se habría excedido los promedios de facturación -neta de impuestos- de los periodos fiscales reclamados, conforme las distintas resoluciones que se fueron dictando.

El beneficio de reducción de porcentaje de contribuciones patronales derivados del Decreto 814/01 se complementa con el Decreto 1009/01 que estableció la definición de Pymes, por remisión a la Resolución N° 24/2001 de la SEPyME la que, a través de su artículo 1°, dispuso que serían consideradas micro, pequeñas y medianas empresas aquellas cuyas ventas totales expresadas en pesos no superen los valores por ella establecidos. Dichos montos, fueron actualizados en virtud de la Resolución 675/02 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional y distintas Resoluciones Años 2010, 2011 y 2012 Res. 21/2010; Año 2013 y 2014: Res. 50/2013; Año 2015 Res. 357/2015; Año 2016 Res. 11/2016; y Año 2017 Res. 103-E/2017.

En virtud de lo anterior entiendo que el encuadramiento de Pyme quedará esclarecido si la facturación arroja un monto inferior al límite fijado por las resoluciones antes citadas que corresponden al periodo por el cual se efectuaron los cargos.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe tener presente que los decretos 814/01 y 1009/01 así como el artículo 173 de la ley 27430, fueron derogados por la ley 27.541, la cual en su capítulo tercero bajo el título “Seguridad Social. Contribuciones Patronales”, estableció un nuevo régimen de alícuotas. Esta modificación, si bien no abarca el periodo reclamado, deberá tenerse en cuenta para periodos posteriores.

Lo antes expresado viene a coincidir con el criterio adoptado por mayoritaria jurisprudencia de esta Cámara (ver sentencia Sala III del 11/05/2009 “Codimat SA c/AFIP -DGI s/Impugnación de deuda” que remite al dictamen del Sr. Representante del Ministerio Público).

El sentido de este voto torna innecesario el tratamiento de los demás agravios vertidos.

Fecha de firma: 03/05/2023

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#36483131#355949947#20230405124608848



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

Por último y con respecto a la regulación de honorarios que imponen los artículos 163 y 164 del CPCCN cabe tener presente que la ley 27.423 no puede ser aplicada en autos en forma mecánica dado que dicho texto legal no contempla en forma expresa el proceso de impugnación de deuda. Ello así y teniendo presente lo expresado por el Superior Tribunal de la Nación en cuanto a que la regulación de honorarios no debe depender exclusivamente del monto del reclamo sino que deberá ser ponderada por los jueces, bajo pautas de razonabilidad, atendiendo a la naturaleza, complejidad del asunto, mérito de la causa, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado (Fallos 257:142; 296:126; 302:302:534 y sus citas; 320:495; 339:216 entre otros) y lo dispuesto por el artículo 1.255 del Código Civil y Comercial de la Nación se regulan los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte actora en 34 UMA (\$522.655), conf. CSJN Ac. 09/2023. Con respecto a los honorarios de representación letrada de la demandada estese a lo dispuesto en el artículo 2° de la ley 27.423.

Por lo expuesto propongo declarar habilitada la presente instancia judicial, se haga lugar al recurso de apelación presentado se revoque la resolución recurrida, se impongán las costas al organismo (art. 68 CPCCN) y por último se regulen los honorarios de representación letrada de la parte actora en 34 UMA (\$ 522.655), conf. CSJN Ac.09/2023. Con respecto a los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte demandada, deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 2° de la ley 27.423.

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

No puedo compartir el criterio de mi distinguido colega de Sala.

En autos el presentante impugna la Resolución 2085-E-2021 que determinó la existencia de deuda por diferencia en las contribuciones a la Seguridad Social ingresadas por los periodos 01/2010 a 05/2013, por lo que se considera un incorrecto encuadre de la rubrada en el Decreto 814/200. El reclamo asciende a la suma de \$ 2.267.762,34 comprensiva de capital e intereses y la imposición de tres multas, una de las cuales -correspondiente al periodo 06/2013 a 12/2016- fue dejada sin efecto.

Concretamente la apelante rechaza la deuda determinada por entender que el organismo efectúa una interpretación equivocada de las normas aplicables, en la medida que frustra el fin promocional tenido en miras por el legislador al establecer la disminución de la alícuota a aplicar en favor de las Pymes como un incentivo para su desarrollo. Explica en su memorial que han transcurrido más de 20 años sin que las normas involucradas sufrieran ninguna modificación





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

quedando, de este modo, sumamente distorsionadas con respecto a la realidad económica. Continuando con u relato expresa que la SEPyME es el órgano de la autoridad competente que ha fijado anualmente mediante el dictado de distintas resoluciones los topes de ventas anuales que deberán ser consideradas para determinar si determinado ente jurídico califica como PyME o no, debiendo estarse de acuerdo a esos nuevos parámetros. Cita en su memorial las resoluciones 24/2001, 675/2001, 147/2006, 21/2010, 50/2013, 357/2015, 11/2016 y 340-E/2017.

La demandada rechaza la apelación presentada argumentando que los agravios vertidos no son más que una disconformidad con lo decidido en el ámbito administrativo pero que en realidad no hay agravios concretos pues en ningún momento demostró que la aplicación efectuada de la norma fuera incorrecta.

Coincido con mi colega de Sala en la necesidad de proceder a la apertura de esta instancia, atento haberse acompañado un seguro de caución por la suma de \$ 2.596.689,51 que constituye un respaldo suficiente frente al reclamo formulado en sede administrativa. Cabe tener presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha aceptado la validez de la presentación de un seguro de caución en sustitución del depósito previo (CSJN 04/11/08 “Orígenes AFJP c/AFIP-DGI” Fallo 331:2480). Dicha postura se fundamenta en a la necesidad de salvaguardar el debido derecho de defensa que en nuestro medio goza de tutela constitucional (art. 18 CN).

En cuanto al fondo del tema sometido a juzgamiento habré de propiciar la confirmación de la resolución recurrida.

Sobre el tema en disputa ya he fijado mi posición como vocal preopinante en la sentencia definitiva 150.132 del 19 de febrero de 2013 recaída en los autos “Granja Dos Cuñados SA c/AFIP” que he reiterado al votar la causa “Arpenta Cambios SA c/AFIP” sent. del 17/03/17.

En efecto, la ley 24.476 creó un régimen jurídico especial tendiente a promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, considerando como tales a aquellas cuyo plantel no supere los cuarenta trabajadores y tengan una facturación anual inferior a la cantidad que para cada actividad fije un organismo administrativo –Comisión Especial de Seguimiento– que sería el encargado de evaluar el impacto que, sobre las relaciones de trabajo, tuviera la creación de un régimen laboral especial en la materia (arts.83 y 105, ley citada).

De lo expuesto surge que la noción de pequeña y mediana empresa es fluctuante al menos en materia económica pues, aunque la empresa no llegue a





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

superar los cuarenta trabajadores bien podría ser considerada una gran empresa cuando su facturación anual supere cierto monto, lo que revelaría su potencialidad económica.

Con posterioridad se sancionó la ley 25.300 –ley de fomento para la micro, pequeña y mediana empresa- cuyo objetivo sería el fortalecimiento competitivo de dichas entidades aclarándose que la autoridad de aplicación será la que definirá las características de las empresas para ser tipificadas como: micro, pequeña o mediana aclarando que, entre sus tareas está la de revisar anualmente la definición de micro pequeña y mediana empresa a fin de actualizar los parámetros y especificidades contempladas en la definición adoptada (ver art. 1º, ley citada) que no sería otra que la establecida por el art. 83 de la ley 24.467.

En cumplimiento de los fines establecidos por la ley 24.467 se dictó el decreto 943/97 que creó la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa como autoridad de aplicación de la ley 24.467 y es, dicha autoridad, la que determinó que empresas serían consideradas micro, pequeñas o medianas tomando como referencia que las ventas totales anuales no superaran ciertos valores que eran diferenciados según se trate de empresas de construcción, servicios, comercio, industria y minería y agropecuario.

El art. 2º del Decreto 814/2001 establece una alícuota del 21% para los empleadores cuya actividad principal sea la locación y prestación de servicios con excepción de los comprendidos en las leyes 23.551, 23.660, 23.661 y 24.467 y uno sustancialmente menor para los restantes empleadores no comprendidos en el inciso anterior, esto es los empleadores considerados titulares de una pequeña o mediana empresa, siendo dicha resolución afectada por la sanción de la ley 25.453 que redujo la alícuota al 20%.

Cabe destacar que las anteriores directivas no tienen un carácter absoluto pues por la propia ley 25.414 que declaró la emergencia pública se facultó al Poder Ejecutivo a eliminar exenciones en materia fiscal y/o contributiva y por ello se dictó el decreto 1.009/2001 estableciendo que las pequeñas y medianas empresas estarían comprendidas en los términos del art. 2º inciso a) del decreto 814/2001 en la medida que sus ventas totales anuales superen los 48.000.000 millones de pesos que es, precisamente, lo que sucede con el apelante.

Como ya expresara la definición de pequeña y mediana empresa es mutable en nuestro ordenamiento jurídico y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa tiene facultades para tipificar que entidades productivas entran en dicha tipología o no, exclusivamente a los fines laborales (art. 83 ley 24.467) pero no fiscales y/o contributivos, debiendo prevalecer directivas como las derivadas de la ley 25414 que es un cuerpo normativo de emergencia pública.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

Por otra parte, y dado que en lo atinente al cumplimiento de las exigencias de seguridad social el mero incumplimiento genera la consiguiente responsabilidad y sanción sin que tenga cabida el elemento subjetivo (ver esta Sala sent. del 19/10/98 “Pilot Pen SA”), no encuentro en la causa elementos suficientes que justifiquen apartarme de la decisión administrativa que se recurre. Lo anterior responde a la cuestionada imposición de multa.

Al respecto cabe expresar que dentro de la disciplina administrativa las multas se aplican por la sola contradicción entre la conducta y la norma que impone el deber incumplido, sin atención a la intencionalidad del infractor (CFSS, Sala I, sent. def. 97.552, 05/04/02 “Pesquería Marplatense c/AFIP s/Impugnación de deuda”).

En el caso que nos ocupa, la conducta tipificada como irregular no es otra que la incorrecta aplicación de una alícuota no pudiendo aceptarse que nos encontremos ante un acto administrativo carente de causa y/o que adolezca del vicio de nulidad, tampoco puede afirmarse que nos encontramos ante una falta que no pueda causar perjuicios económicos a la administración que se nutre de tales recursos para cumplir con sus compromisos previsionales (arts. 16 y 18, ley 24.241).

En tal sentido se ha señalado que resulta justificado que las normas tributarias contemplen medios coercitivos para lograr la satisfacción oportuna de las deudas fiscales cuya existencia afecta de manera directa el interés de la comunidad porque gravitan en la percepción de la renta pública (CSJN. 03/02/93, “Madero Unzué, Sara c/Demaría Sala y otro”, Fallos 316:42).

Por último, cabe expresar que si bien los decretos 814/01 y 1009/01 así como el artículo 173 de la ley 27430 a la fecha se encuentran derogados por la ley 27.541, la cual en su capítulo tercero bajo el título “Seguridad Social. Contribuciones Patronales”, estableció un nuevo régimen de alícuotas. Tal cambio normativo no alcanza al periodo reclamado, si bien deberá ser tenido en cuenta para periodos posteriores.

Con respecto a los honorarios, siendo que la ley 27.423 no contempla en forma expresa la regulación referida a impugnaciones de deuda, atento la calidad, extensión de la tarea realizada y lo dispuesto por el artículo 1.255 del Cód. Civ. y Ccial de la Nación entiendo que corresponde fijar los emolumentos de la representación letrada de la parte demandada y de la parte actora en 15 UMA (\$ 223.995) y 10 UMA (\$149.330) respectivamente, conf. CSJN Ac. 09/2023.

Por lo expuesto propongo declarar habilitada la presente instancia judicial, confirmar la resolución recurrida, imponer las costas a la vencida (art. 68 CPCCN), regular los honorarios de representación letrada de la parte demandada





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

en 15 UMA (\$ 223.995) y en 10 UMA (\$ 149.330) los correspondientes a la representación letrada de la parte actora (CSJN Ac. 09/2023).

EL DOCTOR JUAN FANTINI ALBARENQUE DIJO:

Adhiero al voto del Doctor Walter F. Carnota.

Por lo expuesto el Tribunal, por mayoría, **RESUELVE:** 1º) Declarar habilitada la presente instancia judicial, 2º) Hacer lugar al recurso de apelación presentado y revocar la resolución recurrida, 3º) Imponer las costas al organismo (art. 68 CPCCN), 4º) Regular los honorarios de representación letrada de la parte actora en 34 UMA (\$ 522.655), conf. CSJN Ac.09/2023. Con respecto a los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte demandada, deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 2º de la ley 27.423. Regístrese, notifíquese, publíquese y, oportunamente, remítase.

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara

WALTER F. CARNOTA
Juez de Cámara Subrogante

JUAN FANTINI ALBARENQUE
Juez de Cámara

Ante mí: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI
Secretaria de Cámara

ALP.

